

Traducción
Libertades civiles en una pandemia
Project Syndicate

Por Stefanie Stantcheva ¹

A pesar de las diferencias entre países, la mayoría de las personas están dispuestas a renunciar a algunas libertades civiles en los casos en que hacerlo parezca necesario para superar una crisis como la pandemia del COVID-19. Pero si bien ese pragmatismo debe ser bienvenido, también apunta a la necesidad de salvaguardas más fuertes contra la erosión democrática.

CAMBRIDGE - El contrato social implícito que sustenta a los gobiernos democráticos en todas partes tiene como objetivo garantizar tanto el bienestar de los ciudadanos como el respeto por sus libertades civiles, que incluyen la libertad de expresión, reunión y culto, así como la equidad procesal. Estas libertades son tan fundamentales para el funcionamiento de las democracias modernas que los filósofos políticos a veces las consideran como "valores sagrados" que no deben ser sometidos a comparaciones ni compensaciones.

No obstante, las grandes crisis, desde guerras y ataques terroristas hasta desastres naturales y pandemias, pueden poner las libertades civiles en conflicto con el compromiso más amplio con el bienestar de los ciudadanos, particularmente en lo que respecta a la seguridad y la protección. Estos momentos de tensión tienden a arrojar luz sobre las oscuras discusiones implícitas en el contrato social, porque restringir temporalmente ciertas libertades civiles es a menudo un componente crucial de la respuesta política a las crisis importantes. Este es el caso del COVID-19. Las soluciones tecnológicas son aún pocas y las medidas de salud pública implican, como mínimo, restricciones de movimiento, reunión y, en algunos casos, contenido de los medios.

¿Hay alguna razón para preocuparse de que la pandemia sirva de pretexto para la erosión de los derechos a largo plazo? Según algunos medios, la hay. El grupo de expertos y la organización de vigilancia Freedom House descubrió que, desde el inicio de la pandemia, "la situación de la democracia y los derechos humanos ha empeorado en 80 países, con un deterioro particularmente agudo en las democracias en lucha y los estados altamente represivos".

Según The Economist, los gobiernos han asumido comprensiblemente poderes de emergencia para hacer frente a la crisis, pero a veces también han abusado de ellos prohibiendo selectivamente las protestas, tomando como chivo expiatorio a las minorías y quizás aprovechando el hecho de que la atención del mundo se centra en cuestiones distintas de los derechos humanos. Una carta abierta reciente en defensa de la democracia del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral pidió mantener viva la democracia en medio del COVID-19.

¹ Stefanie Stantcheva es profesora de Economía en la Universidad de Harvard.

EL COMERCIO ANTIGUO

La pandemia de COVID-19 es una de las crisis más grandes de la historia reciente, debido no solo a su alcance y escala, sino también a los desafíos particulares que plantea a las democracias liberales, que han luchado por encontrar un equilibrio entre mantener las libertades civiles y contener la propagación y efectos más amplios de un virus altamente contagioso y mortal. Proporciona una ventana única y trágica al antiguo compromiso entre las libertades civiles y la seguridad (sanitaria), dado que la amenaza patógena y las medidas de contención relevantes son las mismas en una variedad de entornos diferentes. La forma en que los ciudadanos ven este dilema fundamental y qué factores dan forma a lo que están dispuestos a sacrificar son preguntas esenciales que tenemos la oportunidad de responder.

Cuanto más sepamos sobre lo que la gente está dispuesta a perder para proteger su salud o su libertad, y cómo han evolucionado esas preferencias a lo largo de la crisis, mejor posicionados estaremos para diseñar una política eficaz.

En general, los gobiernos democráticos buscan responder y tener en cuenta las preferencias de sus ciudadanos. El grado en que los ciudadanos estén de acuerdo con la justificación de las restricciones legislativas o reglamentarias a su libertad depende directamente de su voluntad de cumplir con las políticas de respuesta a emergencias. Y esta cuestión de cumplimiento podría, en última instancia, determinar si la respuesta de un gobierno tiene éxito o fracasa.

Además, incluso si la mayoría de la gente está dispuesta a aceptar una suspensión temporal de muchas libertades civiles, siempre existe el riesgo de que los gobiernos o los grupos de interés exploten el estado de excepción para tomar más poder o promover sus propias agendas estrechas. Las actitudes públicas hacia estas compensaciones tienen por tanto implicaciones para la formulación de políticas mucho más allá del problema de salud inmediato en la crisis de COVID-19.

Por ejemplo, la forma en que los estadounidenses evalúan los riesgos de cumplir con un deber cívico como votar podría determinar el resultado de las elecciones estadounidenses del próximo mes, especialmente si los votantes de los estados indecisos temen que las boletas por correo no se consideren válidas. Y, por supuesto, las mismas preocupaciones se aplican a los ciudadanos que están considerando participar en manifestaciones públicas, como las que exigen justicia racial este año.

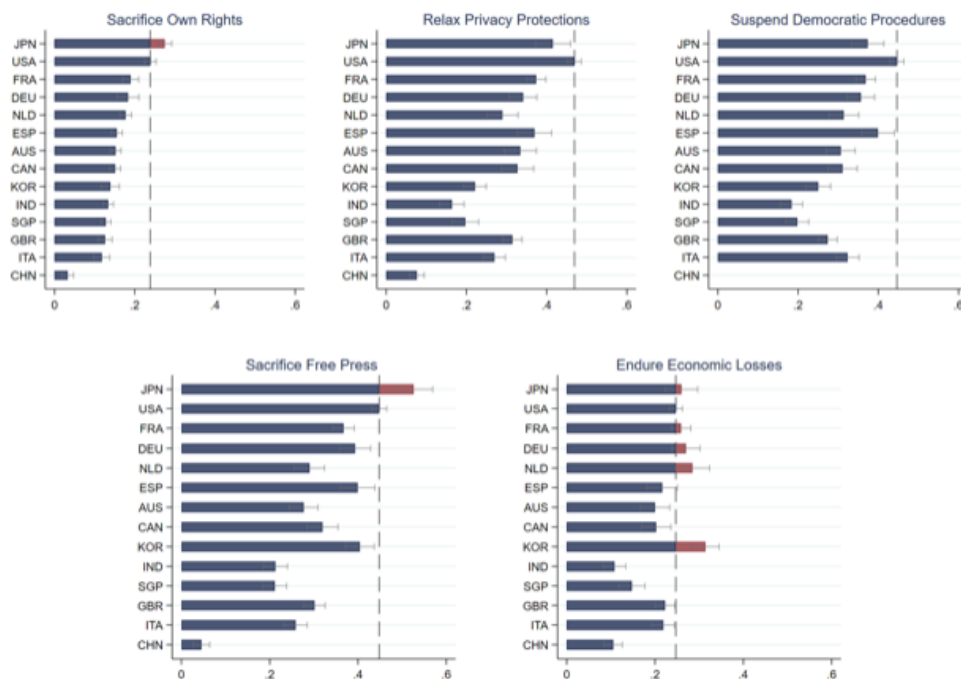
En todo el mundo, los países han asumido posiciones muy diferentes sobre estos temas, algunos se basan simplemente en la responsabilidad individual y pautas simples, y otros persiguen programas intensivos de pruebas, rastreo y seguimiento a través de dispositivos móviles. Incluso dentro de Europa, las políticas han sido muy diferentes. Mientras que el gobierno francés impuso un bloqueo nacional, Alemania adoptó medidas menos restrictivas y una gestión descentralizada a nivel regional (Länder).

Las respuestas del gobierno también han variado en cuanto a su calendario y secuencia. Por ejemplo, Alemania hizo que las máscaras faciales fueran obligatorias en el transporte público en abril, mientras que Holanda esperó hasta junio, y Suecia no lo ha hecho en absoluto. Algunos países suspendieron las protecciones de privacidad y presionaron para que se compartieran datos personales desde el principio. En Corea del Sur, las autoridades públicas han sido muy eficaces para rastrear contactos con la ayuda de una aplicación para teléfonos inteligentes que rastrea la movilidad y los datos de tarjetas de crédito, así como los movimientos a través de imágenes de CCTV. Pero un enfoque similar se encontró con poco entusiasmo en Francia cuando el gobierno lanzó una aplicación voluntaria de rastreo de contactos para teléfonos inteligentes.

LA VISTA A NIVEL DEL SUELO

Para determinar la posición de las personas sobre estos temas en todo el mundo, mis colegas y yo hemos realizado encuestas representativas a gran escala de más de 370.000 encuestados (y contando) en 15 países: Australia, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Países Bajos, Singapur, España, Corea del Sur, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos, en varias fases de la pandemia de COVID-19. Al centrarnos directamente en las actitudes cambiantes de los ciudadanos hacia las políticas de salud pública y las libertades civiles, podemos ver cómo las personas navegan por las compensaciones provocadas por la pandemia, así como los factores que dan forma a las preferencias públicas.

Share of Respondents in different countries unwilling to for the sake of public health
(vertical line: USA benchmark)



En las encuestas realizadas hasta el momento, destacan varias conclusiones. Primero, aunque muchas personas en todo el mundo dijeron que renunciarían a algunas libertades civiles por mejores condiciones de salud pública, había diferencias sustanciales entre países. En general, alrededor del 80% de los encuestados estaban dispuestos a sacrificar al menos algunos de sus propios derechos en tiempos de crisis, y los ciudadanos de los países encuestados calificaron la importancia de las libertades civiles fundamentales de manera similar. Por ejemplo, las personas tienden a estar menos dispuestas a renunciar a los derechos a la privacidad o a ceder el poder a una figura central, y más dispuestas a soportar restricciones personales o pérdidas económicas significativas.

Pero algunas de las diferencias entre países son sustanciales. Por ejemplo, solo el 5% de los encuestados en China expresaron su falta de voluntad para sacrificar sus propios derechos durante tiempos de crisis, mientras que lo hicieron cuatro veces más encuestados en los EE. UU. Además, casi la mitad de los encuestados estadounidenses dijeron que no darían ningún fundamento a la libertad de prensa, en comparación con menos del 5% de los encuestados en China y el 37% en Francia. En general, los ciudadanos de Corea del Sur, India, Singapur, Reino Unido, Italia y China parecen estar más dispuestos a renunciar a sus libertades que los de Francia, Alemania, Estados Unidos o Japón. (Australia, Canadá y otros países de la UE se encuentran en el medio).

Un segundo hallazgo es que las personas tienden a aferrarse con más fuerza a los derechos de privacidad cuando han residido anteriormente en países donde tales protecciones son limitadas. Por lo tanto, los encuestados surcoreanos que habían emigrado de Corea del Norte durante la Guerra de Corea estaban menos dispuestos a renunciar a sus derechos individuales incluso durante una crisis, al igual que las personas nacidas y criadas en los cinco Länder alemanes que comprendían Alemania Oriental antes de la reunificación.

También encontramos un patrón fuerte y robusto de individuos con mayor exposición a riesgos para la salud que exhiben una mayor disposición a renunciar a las libertades civiles en nombre de la salud pública. No es sorprendente que los ciudadanos más propensos a las complicaciones de salud relacionadas con el COVID-19 estén más dispuestos a sacrificar los derechos y libertades individuales que aquellos que tienen un riesgo menor. Los primeros tienden a aceptar políticas para relajar las protecciones de la privacidad, suspender los procedimientos democráticos, delegar la toma de decisiones en expertos y restringir la actividad económica y la movilidad. Este también es un desafío para las democracias. El hecho de que la incidencia de la pandemia sea tan diferente entre los grupos demográficos y de que el propio riesgo moldee la voluntad de uno para tolerar las restricciones a las libertades civiles, significa que las personas en el mismo país que enfrentan diferentes niveles de riesgo pueden no estar de acuerdo sobre la respuesta política adecuada.

MÁS QUE SALUD

Un tercer hallazgo se refiere a la prominencia de ciertos factores socioeconómicos sobre otros en la conciencia pública. Las personas con menos educación y vínculos más débiles con la fuerza

laboral, o (en el caso de los EE. UU.) Son miembros de minorías raciales y étnicas, están menos dispuestas a negociar sus derechos que otros grupos, incluso frente a mayores riesgos para la salud. Quizás poder aceptar restricciones a las libertades civiles es un "lujo" que los miembros de estos grupos, que pueden tener una larga historia de exclusión y abuso, no pueden permitirse, por lo que ven tales restricciones como una amenaza para sus vidas y sustentos. También es posible que aquellos que tienen más ventajas económicas ya tengan sus intereses bien representados por los legisladores y no necesariamente tengan que depender de la libertad de expresión y reunión, y mucho menos preocuparse por la vigilancia estatal.

Nuestro cuarto hallazgo es que la dieta de la información también es un factor importante en la evaluación de las compensaciones. Cuando expusimos experimentalmente a los encuestados a información que destacaba los riesgos para la salud pública y la justificación de la adopción de medidas contundentes para aplanar la curva de la epidemia, fue más probable que aceptaran restricciones a sus libertades civiles. Por el contrario, los encuestados que se enteraron de las agresivas medidas de salud pública adoptadas por algunos países en respuesta al virus y que se les hizo pensar en la posible erosión de los derechos a largo plazo se volvieron menos dispuestos a tolerar las restricciones a sus libertades civiles.

Finalmente, encontramos que la voluntad de sacrificar derechos y libertades disminuyó gradualmente entre marzo y mediados de junio de este año, a medida que disminuyeron las preocupaciones iniciales de la gente sobre los riesgos para la salud. Durante este período, la voluntad de sacrificar las libertades civiles comenzó a estabilizarse en todos los países, a pesar de sus experiencias muy diferentes con el virus. Pero en julio, cuando las infecciones de algunos países comenzaron a aumentar nuevamente, también lo hicieron las preocupaciones públicas sobre la crisis de salud. Y más recientemente, con la segunda y tercera oleadas epidémicas que azotan a muchos países, las preocupaciones públicas han vuelto a aumentar, lo que se refleja en una mayor disposición a negociar las libertades civiles.

COMPLICADO, PERO CLARO

En general, encuestas recientes sugieren que la mayoría de las personas en todo el mundo están dispuestas a sacrificar al menos algunas de sus libertades civiles en nombre de la salud pública. Incluso en los bastiones liberal-democráticos, la mayoría de la gente no ve las libertades civiles como "valores sagrados" que deben ser defendidos en todas las circunstancias. Entre la mayoría que acepta compensaciones, la voluntad de un individuo de aceptar menos libertades civiles se correlaciona fuertemente con sus propios riesgos de salud percibidos. Por tanto, las circunstancias personales parecen desempeñar un papel importante en la formación de actitudes hacia los derechos y libertades democráticos en tiempos de crisis.

Pero el panorama general se complica por el hecho de que la disposición de las personas a sacrificar derechos disminuye con el tiempo. Cuando se trata de mantener políticas de salud pública a largo plazo, esta tendencia podría socavar el cumplimiento; sin embargo, también sirve como un freno importante contra gobiernos o líderes políticos que usarían la crisis como una oportunidad para suspender las libertades básicas indefinidamente.

En última instancia, los gobiernos democráticos seguirán enfrentando el mismo desafío básico de responder a las preferencias públicas y al mismo tiempo salvaguardar la salud pública. Durante una pandemia, proteger la salud casi siempre requerirá al menos algunas restricciones a la libertad individual. Como tal, existe una clara necesidad de salvaguardias más sólidas para garantizar que esos estados de excepción sigan siendo temporales, a menos que una crisis de salud pública conduzca a una crisis de la democracia, con todas las dificultades sociales y económicas que puedan derivarse.